

## LUIS CASTELLS

"Si el dolor es incomunicable, como afirmó Améry, aquello que lo genera puede señalarse".

ANA CARRASCO CONDE, *Decir el mal* (2021)

"La violencia, en cualquiera de sus formas, tiene una extraordinaria capacidad de seducción. A veces por la parte lúcida y a veces por la cara B".

EDUARDO MADINA Y BORJA SÉMPER, *Todos los futuros perdidos: conversaciones sobre el final de ETA* (2021)

La violencia entendida como el ejercicio para tratar de imponer la voluntad de una parte por medio de la fuerza es un fenómeno universal y genérico, presente en todas las sociedades de manera que es consustancial a ellas y forma parte de toda relación social (Aróstegui, 2010: 23). Como dijo Julio Caro Baroja, *la violencia, en sí, es tan antigua como el género humano*. Precisamente el hecho de que sea un fenómeno ubicuo y diverso, que se manifiesta en los más variados ámbitos, motiva su capacidad de cautivar, de atraer, de fascinación (González Calleja, 2002: 11).

Ahora bien, si la violencia puede llegar a ser un fenómeno innato en el comportamiento social, tal hecho se manifiesta con unos patrones distintos según el momento histórico, de manera que sus diferentes expresiones pueden resultar un indicador del periodo y del tipo de sociedad de la que estamos hablando. En este sentido, la violencia tiene su *historicidad* y hay que convenir con Foucault que todo proceso civilizatorio tiene sus sistemas de coerción. Bajo este prisma y siguiendo a Tilly (2007), observamos que con la construcción de los Estados-nación modernos asistimos a un estadio distinto de la violencia, definida en este caso por su componente político (las violencias políticas), un fenómeno contemporáneo que asienta la violencia institucional en la idea weberiana del Estado como monopolizador

legítimo de la fuerza. En semejante contexto y frente a una violencia connatural o inserta propia de las sociedades precapitalistas, asistimos a una violencia como un acto político definido, como un instrumento específico que se visibiliza y a través de cuyo empleo se pretende conseguir un determinado fin (Aróstegui, 2010). En la época contemporánea esa violencia política toma diversas manifestaciones y aparece también como violencia organizada (guerras, revoluciones, genocidios, terrorismo o violencia clandestina), fenómenos todos ellos de gran impacto y que han producido sensibles transformaciones.

A este respecto, si por algo destaca la historia mundial durante los primeros cincuenta años del siglo XX es por ser un periodo de una violencia devastadora. Las dos guerras mundiales, con sus espectaculares cifras de muertos como acontecimiento más impactante, han llevado a algunos historiadores a considerar este periodo como el más violento de la humanidad. La guerra no fue sino la expresión más rotunda de un clima beligerante, que también se manifestó en la etapa de entreguerras en la *brutalización* de la política, una práctica que dominó la vida de los ciudadanos europeos que se caracterizaba por el hecho de que en los temas públicos el recurso a la violencia formaba parte de la cotidianidad.

No es, por tanto, una especificidad que la cultura política española de la primera mitad del siglo XX estuviera impregnada de un *ethos* violento y que el empleo de las armas fuera aceptado como una variante natural de la actividad política, y esto era así tanto en las formaciones de derechas como de izquierdas, sobre todo si hablamos de sus extremos. Fue una mentalidad que comenzó a quebrarse en el bando de los perdedores de la Guerra Civil tras el fracaso de la experiencia del maquis y de un contexto internacional que propició la consolidación del régimen de Franco y el asentamiento de los bloques internacionales. En el caso de los socialistas el rechazo a la violencia se manifestó tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, si bien ya en el Congreso de 1944 se postulaba una *solución pacífica*, lo que tomaría forma tres años más tarde en el

acuerdo entre Prieto y Gil-Robles de derrocar de manera pacífica a Franco (Aparicio, 2021).

En cualquier caso, dado el intenso activismo que desarrolló durante el franquismo, la propuesta de la política de reconciliación nacional formulada por el Partido Comunista, en 1956, fue la que tuvo un mayor impacto y sobre la que se tejió una nueva cultura política en España. Esa política de encuentro y reconciliación de la sociedad propiciada por el PCE, de superación del enfrentamiento violento y de fomentar las vías pacíficas como el recurso principal de la lucha política, se convirtió en el marco dominante de la oposición de manera que durante el tardofranquismo y la Transición fue ese referente de rechazo a la violencia el marco prioritario sobre el que discurrió la pugna política.

## LA VIOLENCIA EN EUSKADI

Ahora bien, esa cultura política no violenta que se asumió entre buena parte de la oposición española tuvo su excepción en Euskadi. En este territorio el conglomerado de mesianismo revolucionario y utopía violenta propia de los años sesenta y setenta de la extrema izquierda europea encontró un ámbito natural para desenvolverse en la medida que había una organización, ETA, que lo incorporó, añadiéndole además un ingrediente nacionalista radical muy intenso. Sobre esos tres ejes, nacionalismo-violencia-revolucionarismo patriótico, ETA construyó un discurso y, sobre todo, una práctica que se convirtió en un referente en Euskadi, acaparando la organización un notable capital político nuclear precisamente en su componente violento. De esta manera, ETA, durante los últimos años del franquismo, fue protagonista, activo o pasivo, de hechos de un especial impacto social hasta el punto de convertirse en *acontecimientos memoriales* (Molina, 2020: 114), en hechos que generaron fascinación y un *arrastre emocional* en la población vasca (Estornés, 2015). El juicio de Burgos (1970), el magnicidio de Carrero (1973) y los

fusilamientos de Txiki y Otaegui (1975) fueron los tres hitos fundacionales sobre lo que se apuntaló la centralidad de ETA en Euskadi y sobre cuya base distintos sectores de la sociedad vasca dieron un sentido a la violencia que ejercía, considerándola como necesaria o admisible frente a la que aplicaba arbitraria y desproporcionadamente el régimen franquista. La represión indiscriminada del franquismo, así como el hecho de que pusiera el foco del castigo en ETA (juicios con peticiones de penas de muerte), tuvo el efecto de prestigiar a esta organización y facilitó una actitud comprensiva hacia ella por parte de la población que se oponía al régimen. Esa simpatía no caló solamente en sectores de la sociedad vasca, pues en formaciones de la izquierda radical del resto de España se socializó en este momento una visión romántica e idealista de ETA, una consideración de esta organización y de la izquierda *abertzale* como un conglomerado básicamente antifranquista y anticapitalista. Es un imaginario que ha perdurado con el tiempo y cuyo poso permite en la actualidad acercamientos políticos entre sus herederos.

Sin embargo, fue solo en Euskadi donde la semilla de la violencia prendió en aquel tiempo (fines de los sesenta y los setenta), fue aquí donde como consecuencia de la actividad de ETA durante aquellos años se naturalizó y socializó la cultura del uso de la fuerza como herramienta política. La ausencia de crítica a ETA por parte de los grupos de la oposición, la celebración social en Euskadi de algunos de sus señalados asesinatos (Manzanas, Carrero) en la idea del *arrastre emocional* antes dicho, o el casi obligado envilecimiento que como reacción generaba el franquismo y la asunción de respuestas extremas, propiciaron que en ese tiempo la idea de la violencia como un instrumento lícito echara raíces en la sociedad vasca y germinase así en Euskadi *la banalidad del mal* (López Atxurra, 2020). A la par, ello conducía a que se asentara entre la población contraria al régimen una cultura que excluía la razón humanitaria y la consideración de la vida como un bien sagrado, de forma que este valor básico solo era asumido y adquiriría sentido si la



persona en cuestión formaba parte de los *nuestros*. La serpiente depositaba así sus huevos.

En este contexto, la Transición y el año 1977 con las primeras elecciones libres fue un momento clave para que la violencia política quedara deslegitimada y arrinconada socialmente como principio y como recurso y, a la par, se generase una cultura democrática. Los partidos políticos mayoritarios que salieron tras esas primeras elecciones en España fueron aquellos que convergían en la superación del guerracivilismo y muy en especial en el rechazo a la cultura de la violencia, marginada en la vida política española a partir de este momento en favor de las vías pacíficas y de la aceptación de la confrontación democrática. Fue también el momento en el que todas las fuerzas políticas tuvieron que ejercitarse en la práctica de la democracia, aprender sus reglas y cultura, valorar lo que este sistema implicaba. Era una lección asimismo necesaria para la izquierda radical española y vasca, acostumbrada a minusvalorar la democracia y a manejar recursos lingüísticos peyorativos cuando había que referirse a ella tales como *democracia burguesa* o *democracia formal*, frente a la que se contraponía la *popular*, un trasunto terminológico que evidenciaba el escaso calado de la idea liberal de la democracia entre tales formaciones políticas.

Fue, pues, un momento de un alcance extraordinario en la cultura política española hasta el punto de poder considerarlo como un hito en su trayectoria. Se plasmaba de este modo la política que había venido sosteniendo buena parte de la oposición al franquismo y, muy especialmente, la idea que había puesto en práctica el PCE de la reconciliación nacional. Asimismo, ese baño de realidad que supusieron las primeras elecciones en las que la sociedad opinó puso de manifiesto en el caso de Euskadi que el apoyo a ETA —en sus distintas expresiones— era limitado, lejos de lo que presumía su entorno y muy distante de las formaciones triunfadoras caracterizadas por su moderación, exclusión de la violencia y aceptación del nuevo marco institucional.

Sin embargo, ETA continuó en el País Vasco y lo hizo además con el apoyo o comprensión de diversos sectores de la sociedad vasca que le permitieron incrementar su actividad violenta. La razón de esta excepcionalidad de Euskadi, de este descuelgue en el rechazo a la violencia política en aquel momento y de la pervivencia de su cultura en sectores de su población, se debió, entre otros, a dos factores principales.

En primer lugar, la indicada centralidad de ETA y de su discurso patriótico en la comunidad vasca, de su proyección social labrada durante el franquismo, lo que por extensión implicaba que la población se empapara de lo que esta organización fundamentalmente representaba: la violencia y el nacionalismo radical. Las encuestas de opinión realizadas en Euskadi en los primeros momentos de la democracia reflejaban tanto la buena opinión que se tenía de ETA como, por el contrario, la negativa del Estado, consecuencias ambas del régimen anterior. Así, en 1979, un 50% de la población vasca consideraba a los miembros de ETA como patriotas/idealistas y solo un 13% como terroristas/asesinos (un 29% como manipulados/fanáticos). En cuanto a la violencia, dos años después, en 1981, un 48% opinaba que era consecuencia *de tantos años de centralismo* y un 29% continuaba pensando que más grave que los atentados (de ETA) *es la violencia ejercida por el Estado* (Oleadas Euskobarómetro en Sáez de la Fuente, 2011: 9). El imaginario construido por el nacionalismo de Euskadi como víctima absoluta había calado y era necesaria una política fina para desmontar ese discurso.

Precisamente el segundo aspecto influyente de esa excepcionalidad en el tema de la violencia que mencionábamos fue que el nuevo Estado que surgió con la Transición no logró revertir la deteriorada imagen que se tenía de esta institución en Euskadi. Ello fue consecuencia básicamente de que, en un tema tan sensible en la sociedad vasca como era el del orden público y su relación con la ciudadanía, los cuerpos de seguridad siguieron cometiendo graves excesos, lo que echaba por tierra los intentos de los Gobiernos de la Transición de abrirse a la sociedad vasca (Pérez, 2021).



Ciertamente el nuevo Estado tuvo que hacer frente a una durísima campaña de ETA que buscaba la desestabilización del incipiente sistema democrático, descalificado desde su origen por la organización en tanto que lo consideraba como una continuidad de la dictadura militar. ETA puso el foco de sus ataques en los componentes de los aparatos de seguridad del Estado y en los militares, buscando que hubiera una reacción desmesurada y de fuerza por su parte y que una represión extensiva, al estilo de la aplicada durante el franquismo, asentara la simpatía hacia ETA.

Dicho lo cual y establecida la principal responsabilidad de ETA, hay que reiterar el fracaso del nuevo sistema político en el tema del orden público. Sucesos como los de Montejurra (mayo de 1976) o Vitoria (marzo de 1976), con la muerte de cinco personas como consecuencia de la intervención de la policía armada, a los que deben añadirse los cinco civiles fallecidos tras las intervenciones de las fuerzas de orden público dentro de las jornadas pro amnistía en mayo de 1977, arrojaban una sombra de duda sobre el proceso de cambio que se estaba acometiendo en España. Después de las elecciones de 1977, el comportamiento de las fuerzas de seguridad no varió sustancialmente, de manera que continuaron produciéndose excesos y usos desmesurados de la fuerza por parte de los agentes de la autoridad, con conductas como el llamado *gatillo fácil*. Por si esto no fuera poco, hay que añadir en el caso de Euskadi la casi pública connivencia de algunos de sus componentes con la violencia ultra que entonces se desarrolló, o bien la continuación de la tortura tras las detenciones, quizá con el caso más conocido de la muerte de Joseba Arregi en febrero de 1981 como consecuencia de los malos tratos. El resultado fue que los primeros Gobiernos de la democracia fueron incapaces de implementar en el orden público una política que visibilizara de manera nítida los tiempos que corrían en sintonía con las que debían ser sus nuevas funciones de *proteger el libre ejercicio de derechos y libertades* (art. 104 de la Constitución).

Hay que aclarar, sin embargo, que hubo esfuerzos tangibles por parte de la UCD para adecuar las fuerzas de seguridad

al nuevo Estado de derecho, pero tuvieron que hacer frente a notables obstáculos. Entre ellos se contaba la señalada intensificación del terrorismo de ETA, así como la escasísima capacitación de la policía y de las FOP. Otro impedimento fue la existencia de numerosos nostálgicos del franquismo que formaban parte de estos cuerpos y de la milicia, que eran reacios a adaptarse a las pautas democráticas. A todo ello debe añadirse la timidez —obligada o no— de los gobiernos de UCD a la hora de implantar distintas políticas de orden público, todo lo cual motivó que la nueva imagen que pretendía proyectar el sistema político de la Transición en materia tan delicada quedara desdibujada y se diera, por el contrario, aliento al relato que hablaba de la continuidad y del no cambio.

También hay que recalcar la responsabilidad que le cabe al PNV en esta deslegitimación del Estado, pues especialmente en estos primeros años de la democracia desarrolló una política de desafección hacia esta institución y de alejamiento de las FOP. Es lo que denunciaba Benegas acerca de la ambigüedad del PNV, que “condena la violencia” pero a la par se mostraba contrario a las fuerzas de seguridad del Estado (*ABC*, 24/03/1983), confiándolo todo a avances en el régimen estatutario. Era una indeterminación que se alimentaba de declaraciones como “no estamos ni con ETA ni con Martín Villa” (Garaikoetxea, *Deia*, 05/01/1979) o “desconfiamos plenamente de Madrid porque llevamos más de un siglo bajo su bota” (Arzalluz, *Diario 16*, 25/09/1978), así como de su rechazo a las extradiciones de etarras desde Francia, pues a la postre ETA era una organización política (*El País*, 09/09/1984). Existía todavía en las filas del partido *jeltzale* un vínculo emocional con ETA en base a su común nacionalismo (plasmado en el *rechazo a los medios, coincidencia en los fines*) y a la persistencia de nociones como que el Estado era el que había desencadenado la violencia (luego se infería que ETA era una respuesta). En suma, el PNV contribuyó desde su distanciamiento a asentar la cultura de que el Estado (y su metonimia, España) era un cuerpo extraño a los vascos, cuando no responsable de la violencia en Euskadi.

## EL APOGEO DE LA MUERTE

Aunque, como señala Florencio Domínguez (2000: 354), ya desde mediados de los ochenta ETA comenzó a manifestar los primeros signos de agotamiento militar, este decenio fue, paradójicamente, su época dorada. Así fue cuando logró consolidarse y organizarse socialmente a través de un denso y opaco tejido, formando un humus social que se esparció, estableciendo unos sólidos lazos entre sus componentes que le permitieron convertirse en una comunidad dentro de la sociedad, en un grupo cohesionado y autorreferenciado. Fue en este periodo cuando se evidenció que ETA no era una organización terrorista al uso, sino que estaba apuntalada por un consistente movimiento social, en un principio ideológicamente heterogéneo, pero que se fue perfilando de manera que en esta década adquirió sus rasgos de identidad y que le nutrió incesantemente. Articuló sus propios códigos de valores y una inversión moral en su comunidad por la que el mal se convirtió en el bien.

Hubo tres pilares sobre los que ETA y el mundo social sobre el que gravitaba basaban su fortaleza. En primer lugar, la existencia de un eje identitario sencillo, pero como tal con una enorme fuerza y capacidad de socialización que prendió con intensidad entre el *abertzalismo* radical. Tal eje giraba en torno a la denuncia de la represión como un hecho que, en su particular visión, continuó padeciendo el pueblo vasco —trasunto de ETA—, pues, desde este sentimiento, la Transición y la democracia no supusieron una variación en esta persecución arbitraria. En las entrevistas a los militantes de ETA, esa idea de la represión padecida como *pueblo* —otro de sus vocablos mágicos— es reiterada, emergiendo como el principal *leitmotiv* de su incorporación a la organización, represión que se simbolizaba en las detenciones, en las torturas y en el GAL, como hechos atemporales e imperecederos (Gago y Ríos, 2021). De aquí que, tal como se presentaban, los militantes de ETA en ningún caso se veían como perpetradores sino como víctimas, apropiándose así de una categoría que genera un inmediato afecto y apego en

nuestra sociedad, que vive bajo el imperio de *la emoción compasiva, de la política de piedad*. Pero esa percepción de sufrir una intensa represión, que se nutría de hechos ciertos como las torturas, fue además un poderoso combustible del odio, pasión que sentía el mundo de ETA hacia las fuerzas de seguridad en primera instancia y a España como responsable último y a todo lo que entendían que le representaba (López, 2022). Se daba así carta de naturaleza a una pulsión incontrolada que bastaba para considerar al otro como *enemigo* total, sin ninguna consideración humana. Estas palabras de un etarra reflejaban este impulso asesino:

Fuimos a por una persona, un conocido además, y en vez de dispararle desde donde estaba yo [...] salí corriendo hacia él. O sea, como si, no sé, como si digo: “¡Joder! No le voy a dar desde aquí”. Le odiaba tanto a esa persona [...], era tanto el odio que tenía contra él, que digo: “¡Dios, no se me escape!”. Ese era un confidente. [...] Yo después de hacer lo que hacía, me quedaba como un señor y dormía como un rey (Reinares, 2001: 131).

Un segundo pilar era el propio de la violencia y el efecto absorbente y fascinante que su empleo implicaba, que por su impacto y por su enorme poder comunicativo produjo que el foco social se dirigiera hacia quien la promovía, en este caso ETA. La utilización de la violencia por esta organización desde fines de los sesenta desencadenó una espiral de la que era difícil escapar y que, por el efecto envolvente y multiplicador que contiene, definió cada vez más a ETA, hasta convertirse en el elemento estructurante y vertebrador de su proyecto (Arregi, 2020: 145). Así, la centralidad que adquirió en ETA la violencia hizo que esta se convirtiera en su principal reclamo y signo de identificación, en el conducto necesario para la construcción de la nación, de manera que este proceso quedaba asociado de manera banal al uso de la fuerza. Fue la evidencia de que quien usa la violencia de forma sistémica queda atrapado por su dinámica y no podrá escapar de sus derivaciones perversas.



Como otro efecto paralelo, la utilización de la violencia genera por sí misma procesos de radicalización y de fractura, de fragmentación profunda de la sociedad, lo que en el caso de Euskadi supuso que ETA promoviera una ola antagónica de identificación étnica y comunitaria (Molina, 2012: 249; Aulestia, 1993: 123). De este modo la violencia protagonizada por ETA propició, pues, que la fractura étnica vascos *versus* españoles que ETA fomentaba tomara cuerpo y que dentro de su comunidad estos últimos fueron considerados un cuerpo extraño, ajeno a la sociedad vasca y, por lo tanto, exentos de cualquier consideración moral y susceptibles de ser expulsados.

El tercer pilar sobre el que ETA erigió su fortaleza era la referida densa trama social que levantó en la sociedad a través de distintos tentáculos organizativos: sindicalismo, feminismo, juventudes, ecologismo (movimiento antinuclear, Leizarán), etc. Estos grupos civiles gozaron a su vez, y en otra escala, de una sólida implantación en los espacios públicos a través de asociaciones informales como las cuadrillas, grupos deportivos, asociaciones recreativas, vecinales, transmisión intergeneracional... Disponía asimismo ETA de un amplio consorcio de apoyo en el terreno periodístico (*Egin*) y cultural, con editoriales afines, a lo que puede añadirse su influencia en la televisión vasca. Se trataba de un entramado denso que era muy consciente de la importancia de lo diario-rutinario, de los *pequeños retos cotidianos*<sup>10</sup>, desde la triple vertiente de poder acceder a las gentes, de hacerse visibles y, por último, de imponer su lenguaje y visión de las cosas.

Los siguientes años, en un periodo que se extiende entre 1977 a 1987, no supusieron una variación sustancial de lo expuesto. Aunque sin alcanzar las cotas de los *años de plomo* (1978-1980), la capacidad terrorista de ETA siguió siendo

10. "Por ello debemos acéntuar nuestro esfuerzo para llegar a la gente, para dar mayor importancia a esos pequeños retos cotidianos, para desarrollar de un modo más integral y atractivo nuestras formas de militancia". Documento de KAS de principios de 1997, *Karramarro*, 2, p. 3. Documento cedido por Raúl López, que se encuentra en el Fondo de los Benedictinos de Lazkao.

muy elevada (una media de 39 asesinatos entre 1981 y 1987) y el clima de violencia continuó enseñoreando la vida de Euskadi. Siguió produciéndose un colapso del poder legítimo del Estado, incapaz de garantizar la vida del ciudadano ante la violencia de ETA, que aparecía así como un contrapoder real y efectivo, omnipresente, generando la "seducción del vencedor" (Arteta, 2010: 99). Era la atracción del bando ganador, de sentir que se contaba con el respaldo social y no se estaba entre los *marginales*. Fue una etapa especialmente dramática para las víctimas, sin ningún tipo de reconocimiento y atención; asimismo para los amenazados y extorsionados, sin protección policial alguna y teniendo que gestionar su vulnerabilidad con un Estado incapaz de ampararles y, en otro grado, de los resistentes a ETA y a la violencia, que solo desde un compromiso ético y sin respaldo social reaccionaban ante aquella situación que parecía no tener fin. Fue un tiempo de desánimo, en el que un dirigente socialista declaraba en privado: "Reconozcámoslo, ETA nos ha ganado, el problema es que no tenemos nada que darle para que pare". Era una atmósfera de incapacidad, peor aún, de habituarse al terrorismo y naturalizarlo, de considerar que formaba parte de la vida y que había que aprender a sortearlo, no a enfrentarse a él (Madina y Sémpér, 2021: 88). Era tal la frecuencia e intensidad del mal que, como reacción, se generaba una insensibilización social ante él, se le dirigía una mirada evasiva y fría, no comprometida, con la que se buscaba no verse afectado. Era convivir con y adaptarse a "la muerte como rutina" (Pérez, 2021: 19).

Se tenía la percepción de que no había manera de detener la maquinaria de ETA, que se había convertido en un tema enquistado sin que se previera su final y, desde luego, su derrota, hipótesis que en aquel momento no se contemplaba. De aquí surgía esa idea siempre presente sobre la conveniencia de negociar con ella o de volver a emplear instrumentos ilegítimos (el GAL). Era un contexto en el que, tras el atentado de Hipercor (1987), el ministro del Interior, Barrionuevo, manifestó su voluntad de dimitir, aunque a la hora de adoptar esa

postura alegase razones de responsabilidad política y de falta de apoyos (carta a Felipe González, Fundación Felipe González: 24/06/1987).

Por su parte, a lo largo de este decenio, el Estado introdujo cambios en su manera de hacer frente a ETA, insuficientes en cualquier caso para contener el terrorismo. Ello le llevó o bien a no atajar o a consentir el contraterrorismo ilegítimo en la etapa de gobierno de la UCD, o a fomentarlo abiertamente ya con los socialistas a través del GAL. En este segundo caso, y a pesar de lo chapuceramamente que se desarrolló, tuvo éxito en el sentido de incentivar una postura activa de Francia frente a ETA, pero a la par tuvo unos efectos políticos devastadores en Euskadi en la medida que insufló aliento al imaginario de la banda de una Euskadi victimizada por la levadura de la represión constante que sufría. El GAL reforzó el ecosistema del mundo de ETA y su principal argumento: la percepción de la represión como la principal emoción que experimentaba el mundo que le representaba, circunstancia que les hacía sentir que era un *país ocupado, falto de libertades*.

## CAMBIO DE CICLO

Como ya explicara en su momento Luis R. Aizpeolea (*El País*, 15/06/2012), a fines de la década de los ochenta empezó producirse una nueva dinámica en la que comenzó a manifestarse de forma más activa y sistemática el rechazo a la violencia en la sociedad vasca. Ello vino propiciado por asesinatos como el de Yoyes (1986), que golpeaba a la comunidad que afectivamente había estado vinculada a ETA, introduciendo así elementos de desgarramiento en su potencial colectivo. Ahora bien, especial repercusión tuvieron algunas acciones de ETA de una macabra brutalidad como el atentado de Hipercor (1987), que produjo 21 muertos y 45 heridos, seguido del de la casa cuartel de Zaragoza ese mismo año, con 11 asesinados (de ellos cinco niñas) y 89 heridos. La dimensión y el eco de tales atentados empujaron

a que se asistiera a una nueva dinámica política por parte de los partidos democráticos con el objetivo de hacer frente a ETA que culminó en el Pacto de Ajuria Enea (1988). En su consecución influyó la nueva senda del PNV, que, tras la escisión que sufrió y de la que surgió EA, apostó a partir de 1985 por la moderación como opción estratégica más viable para salir de la crisis interna. Ello le llevó a elegir a Ardanza para encarnar esta nueva línea que implicaba un rechazo frontal a ETA (no coincidencia ni en los medios ni en los fines), rompiendo anteriores ambigüedades. Aunque esta posición “no caló en el discurso del partido” (Ardanza, 2011: 256) y, al cabo de unos años, por 1995, el PNV volvió otra vez a la retórica de la *naturaleza política de ETA* y a buscar encuentros con su mundo social, lo cierto es que durante esta etapa la unidad de los partidos vascos facilitó una mayor movilización ante el terrorismo y una sensibilización contra el uso de la violencia. Esa reacción ciudadana, ese rechazo a ETA y por ende a la violencia, fue tomando cuerpo en la sociedad vasca impulsada también por los movimientos cívico-pacifistas (Denon Artean, Gesto por la Paz) y tuvo una nítida expresión en las movilizaciones continuadas y numerosas que se produjeron con ocasión del secuestro de Julio Iglesias Zamora (1993) y la campaña del lazo azul.

Este giro, esta postura más activa de una parte de la población vasca contra ETA y la violencia, fue también consecuencia de la acción del Estado a dos niveles distintos: por un lado, a través de una mayor eficacia policial, con detenciones de la cúpula y de numerosos militantes (Anglet, 1987; Bidart, 1992), que supusieron serios reveses para la banda; por otro, con un cambio de estrategia en la persecución a ETA, mucho más selectiva y precisa: de 531 detenidos en 1987 se pasó a 148 el año siguiente (Domínguez, 2006a: 349). En este punto se abandonó la estrategia antiterrorista de considerar amplias zonas del País Vasco como un territorio de ocupación y a la población como potenciales enemigos, para poner en práctica una política más atinada en sus objetivos. Asimismo, la renuncia a fomentar un contraterrorismo ilegítimo propició también que la lógica de



ETA de acción-represión empezara a quebrarse socialmente y que el argumento de un pueblo vasco víctima absoluta perdiera consistencia y calado.

Se conseguía así el doble efecto de evidenciar que ETA no era invencible, pero, sobre todo, que su discurso sobre el carácter antidemocrático del sistema debido a los usos extensivos y abusivos de la represión quedara desmontado. En la medida que se disponía de una información más abundante y de calidad, que los aparatos de seguridad mejoraron su eficiencia, la acción policial contra ETA se iba ciñendo a sus militantes o a su entorno. Asimismo, la práctica de la democracia en la vida cotidiana de las gentes, la experiencia vivida de un marco democrático y el hecho de que Euskadi se convirtiera en una comunidad hegemonizada por el nacionalismo que controlaba las principales instituciones, hacían más anacrónico y disparatado el relato de ETA de la persecución del pueblo vasco por el Estado español, aunque siguiera siendo operativo entre sus medios más afines.

Como señala el principal especialista en la historia de ETA, Florencio Domínguez, la banda consiguió recuperarse de esas destacadas detenciones, pero no logró ya alcanzar su capacidad militar y mortífera anterior, si bien ello no impidió que siguiera contando con una sólida base social. Se iniciaba así el declive de su principal componente, el violento, una pérdida de fuerza que la banda trató de contrarrestar haciéndose más presente en la sociedad a través de su mundo civil, al que le otorgó la función de socializar el miedo y el terror, de manera que este fuera percibido nítidamente por los resistentes al mundo violento. Ante ese decaimiento militar y, por tanto, de capacidad de infundir miedo, ETA buscó que la coerción social se dilatase a través de sus tentáculos civiles, que debían ser sentidos como una proyección de sí misma, como una amenaza real. Los noventa son el tiempo de la *kale borroka*, de la agresión gratuita por el simple hecho de llevar el lazo azul, de la *violencia de persecución* especialmente a los militantes del PP y del PSE, en suma, de la socialización de la violencia y lo que ello comportaba: la

intolerancia y el fanatismo. Sirvan como ejemplo de esto último las líneas extraídas de un texto de periodistas de *Egin*:

Pero además de secuestrados hemos sido provocados sin descanso ni rellano por la tortura visual y prepotente del nefasto lazo azul. El lazo protegido por los cascos y botas imperiales que negaban con su chulesca ostentación la expresión de los demás. En todos estos días nada ha habido más desafortunado y desdichado que el desafiante lazo (Zabalza, 1993: 10).

Pero ETA no se limitó solo a poner en acción otras prácticas de coerción, también afinó sus estrategias discursivas con nuevos mensajes. En efecto, en esta nueva coyuntura el mundo de la izquierda *abertzale* puso en circulación nuevos hallazgos hermenéuticos, que tenían además el objetivo de traspasar las fronteras de la comunidad estricta para expandirse entre el nacionalismo en general y convertirse en un canon compartido: eran esos sintagmas tantas veces repetidos del *conflicto secular*, de *la existencia de los dos bandos*, del *ámbito vasco de decisión*, o bien del muy operativo *empate infinito*, aunque la paternidad de este haya que atribuírsela a Lokarri. Eran palabras que *hacían* (Austin, 2016).

Ante esa situación de estancamiento o relativa debilidad, ETA promovió un cambio de estrategia (la *Alternativa Democrática*), donde puso el acento en la consecución de un frente nacional que debiera ser hegemonizado por la propia ETA (Domínguez, 2004: 97). Para este fin esas construcciones retóricas mostraron su operatividad, pues, conforme a su propósito, calaron en la comunidad nacionalista. De este modo, el retroceso militar no le impidió mantener la iniciativa política, logrando estabilizar su base social en unos porcentajes significativos (17,5% de apoyo electoral en elecciones al Parlamento Vasco durante los noventa), al tiempo que logró plasmar su opción estratégica con el Pacto de Estella en 1998. La impaciencia de ETA lo echó al traste.

Ahora bien, esta consolidación electoral y los logros estratégicos —luego frustrados— de ETA y su mundo civil no pueden



ocultar los cambios que se produjeron en la sociedad vasca respecto a la consideración de la banda durante la década de los noventa: la violencia producía cada vez más repudio y merecía una peor consideración. Las series elaboradas por el equipo del profesor Llera, el Euskobarómetro, son en este sentido significativas. Si en 1981 un 12% de la población decía apoyar a ETA y solo un 23% expresaba su rechazo total con un significativo 48% que prefería no opinar, ese porcentaje fue variando con el tiempo de modo que en el año 1997 el apoyo se restringía al 6% en tanto que el rechazo absoluto alcanzaba el 59%. El incremento de la movilización ya señalado era también una expresión de ese giro de buena parte de la sociedad vasca frente a ETA y la violencia. No obstante, el estado de terror que ETA y sus prolongaciones instalaron en la sociedad vasca o el encuentro del nacionalismo en el Pacto de Lizarra —volviendo el PNV a la idea expuesta de diferenciarse de la banda en los medios (la violencia) pero coincidiendo en los fines (las aspiraciones nacionales)— supusieron un lastre en este proceso que, en cualquier caso, era imparable. Así, entrados ya en el siglo XXI, la repulsa hacia ETA y la violencia se había instalado en la sociedad vasca de manera abrumadora, de forma que en el 2003 solo un 2% de la población mostraba su apoyo o apoyo crítico a ETA, en tanto que un 64,0% expresaban su rechazo total, porcentajes que en lo sustancial se repitieron en los años siguientes.

## LOS CLAROSCUROS

Desde comienzos de la Transición, la percepción del terrorismo y la violencia habían cambiado radicalmente: tanto a escala nacional como regional, el nuevo sistema político se había legitimado en su condición democrática, mientras que a nivel internacional las acciones terroristas acometidas en este ámbito, especialmente por el yihadismo, habían desacreditado de manera absoluta su empleo fuera cual fuera el grupo que lo utilizara. La violencia de ETA cada vez aparecía también en Euskadi

como más artificial, anacrónica, sin posible justificación y disociada de aquellos a quienes decía representar. En suma, la pervivencia de ETA se convirtió ya no solo en un mal así percibido por la sociedad vasca, un mal sin ningún atractivo, sino también en un lastre para la izquierda *abertzale*, que veía limitado su potencial crecimiento. Por si había alguna duda al respecto, los pobres resultados obtenidos por su marca política en las elecciones autonómicas celebradas a principios de siglo tras la ruptura de la tregua y la vuelta de ETA a las acciones armadas (10,12% en las de 2001, 12,4% en las de 2005) disipaban cualquier incertidumbre. A medida que transcurría el nuevo siglo, los dirigentes del brazo político de ETA fueron conscientes de que las acciones armadas eran socialmente contraproducentes y que la derrota de ETA se estaba haciendo inevitable, por lo que se debía abandonar la vía de la violencia si no querían verse arrastrados por el hundimiento de la banda. La gravísima crisis que sufrió ETA desde el 2001, con detenciones continuadas, facilitó una inversión en la dirección que se había mantenido en el entramado violento, y que el brazo civil pasara a tener, a la altura de 2009, un liderazgo que hasta entonces había ejercido el militar (Domínguez, 2017: 41). Fueron, pues, razones de supervivencia y no de rechazo moral al uso de la violencia las que llevaron a la izquierda *abertzale* a posicionarse a favor de abandonar las armas.

Ahora bien, el rechazo a la violencia no suponía que la marca ETA corriera una suerte pareja, de forma que ese creciente repudio que llegó a ser abrumadoramente mayoritario en la sociedad vasca no implicó que el capital político de sus siglas tuviera un desprestigio similar. Había así distintos mensajes sociales que reflejaban, por un lado, la deslegitimación que generaba el uso de la violencia, pero a la par que la marca ETA continuaba siendo atractiva entre una parte no desdeñable de la sociedad vasca. Así, en las elecciones autonómicas de 1998, celebradas durante la tregua de ETA y en las que se generaron unas expectativas del fin de las acciones armadas de la organización, su referencia electoral, Euskal Herritarrok, alcanzó los



225.000 votos, su máximo histórico, invirtiendo, además, una tendencia constante a la baja que se había iniciado en 1990. Se daba así una singular situación en la que se reflejaba que había una población potencial dispuesta a apoyar la etiqueta ETA, pero no sus intervenciones violentas, entendidas cada vez más como terrorismo. Otro dato aportado por el Euskobarómetro es ilustrativo a este respecto. Si hemos visto la repulsa creciente que, según las encuestas, generaban ETA y la violencia en la sociedad vasca, no sucedía lo mismo con la imagen de sus militantes o, dicho de otra forma, con la representación social que existía de la banda. Así, en 1999, con la tregua en vigor, el 36% consideraba a los activistas de ETA como *idealistas* (un 16% en 1996, sin tregua) y un 13% como *patriotas* (un 8% en 1996), es decir, un total de un 49% tenía una concepción positiva de la militancia etarra. Con la ruptura de la tregua y la vuelta de ETA a la actividad terrorista, ese porcentaje disminuyó, pero manteniéndose en unos márgenes amplios y constantes (en torno al 25% durante el primer decenio del siglo XXI), lo que reflejaría la existencia de un amplio sector de la población vasca susceptible de dar su soporte a una alternativa política y no violenta vinculada con la banda.

Con estos antecedentes no es extraño que, tras el abandono de las armas por ETA, ese apoyo sumergido aflorara de manera que la consideración de los militantes de ETA como *idealistas* o *patriotas* volviera a subir (10% y 28% respectivamente en 2017, o sea, 38% de opinión favorable), a la par que, por el contrario, su consideración como *locos/terroristas* disminuyó (31%). Pero sin duda más elocuente ha sido la consolidación electoral de la izquierda *abertzale*, que ha conseguido un porcentaje de voto nunca antes alcanzado. Así, en las autonómicas del 2012, al año siguiente del abandono de las armas, logró casi 280.000 votos, un 25% del total de los emitidos.

Ello vendría a poner de manifiesto dos aspectos complementarios: por un lado, el ya comentado rechazo de la sociedad vasca a la violencia, pudiendo aquí sí hablar de la sociedad vasca, pues incluso la mayor parte del electorado histórico de ETA expresaba su renuncia a la violencia; por otro, el arrastre

que continúa teniendo el relato sobre el que se construyó la organización terrorista y que sigue gozando de un considerable calado social. Esas construcciones que hizo ETA de sí misma como una organización antifranquista, de sus militantes como *gudaris* que dan su vida por Euskadi en una visión repleta de romanticismo, o la idea del *conflicto*, o sea, de la negación de los derechos nacionales de Euskal Herria, están muy arraigadas y otorgan a su marca política, Bildu-Sortu, una sólida base social. Bien es verdad que la coalición hegemonzada por Sortu reúne en la actualidad unos ingredientes más complejos que la simple remisión a ETA y ha incorporado también en su discurso una agenda de izquierda con la que compite con Podemos, pero lo sustancial, como dice el propio Otegi, es la centralidad de la *cuestión nacional* (Gara, 05/03/2017), así como su lazo umbilical con ETA, aunque esto ya no lo diga.

Opera a favor de la vigencia de este discurso la desmemoria o la memoria sesgada alimentadas desde la izquierda *abertzale* en la idea de que había una violencia estructural del Estado a la que ETA respondió; así como, especialmente, la teoría del *conflicto*, que excede el campo de la izquierda *abertzale* para convertirse en una idea transversal en el mundo nacionalista, en un *canon compartido* (Villanueva, 2009). Ante ello y como suele señalarse, el reto es, pues, que derrotada ETA, logrado que la sociedad vasca muestre su repudio mayoritario al uso de la violencia, se consiga desmontar aquellas construcciones con las que la violencia se asentó y justificó. Porque esta es la gran carencia y el desafío que hoy tiene Euskadi, deslegitimar el terrorismo, fijar y analizar aquello que hizo posible a ETA y el apoyo con el que contó. Ello pasa, en primer lugar, por asumir la prioridad de esa deslegitimación —idea cuestionada desde el nacionalismo vasco, que prefiere primar *la convivencia*—, y, en segundo, por deconstruir el relato sobre el que se articuló, sus construcciones imaginarias e identitarias. Acometer esa necesaria labor supone exponer y hacer visible cómo detrás del terrorismo de ETA había un proyecto ideológico y político de corte totalitario y nacionalista radical que daba cobertura a esa



violencia, así como un pensamiento que negaba el pluralismo y consideraba al diferente como un "otro", un enemigo carente de cualquier valor humano. Mientras no se atiende a los elementos propios que abastecieron la violencia de ETA y se mantengan, por el contrario, discursos genéricos sobre violaciones de derechos humanos o de defensa de la paz como valores referenciales, se estará formulando un discurso inane, que posiblemente por su vaguedad y vacuidad concite más consenso, pero que nos hurtará de conocer y extraer alguna lección sobre cómo se construyó esa cultura de la violencia y hasta qué punto pervive en nuestra sociedad.